

Santiago, uno de julio del dos mil veinticuatro.

VISTOS:

PRIMERO: Que durante los días diecisiete, dieciocho, diecinueve, veintiuno, veinticuatro y veintiséis de junio del año en curso, ante la sala de este Tribunal, presidida por la Magistrada doña Marcia Verónica Fuentes Castro, e integrada, además, por los Jueces don Renato Javier Pinilla Garrido, y doña Karen Ivonne Garrido Saldías, se llevó a efecto el juicio oral en la causa **RUC 1910062244-3, RIT 241-2023**, seguida en contra del acusado **Andrés Henry Urrutia Garcés**, cédula nacional de identidad 16.601.026-8, 36 años, nacido el 1 de noviembre de 1987, soltero, Sargento segundo de Carabineros de Chile, domiciliado en Santa Ester 778 departamento 908 B, San Miguel, quien fue representado por el abogado privado Marco Romero Zapata, con domicilio y forma de notificación registrados en la carpeta digital.

Sostuvo la acusación, el Fiscal del Ministerio Público, Gamal Massú Haddad.

Participaron de este juicio como querellantes, **el Consejo de Defensa del Estado y el Instituto Nacional de Derechos Humanos**, representados respectivamente, por los abogados Rodrigo Beas Navarrete, Alejandra Rojas Uribe y Pamela Campos Villarroel.

SEGUNDO: Los hechos materia de la acusación fiscal, fueron los siguientes:

“El día 19 de octubre del año 2019 alrededor de las 14:00 horas en Gran Avenida José Miguel Carrera, intersección con Avenida Central, en la comuna de El Bosque, mientras la víctima don ERWIN BASTIÁN RETAMALES LEÓN participaba en una manifestación en dicho lugar, llegó al lugar el imputado ANDRÉS HENRY URRUTIA GARCÉS, Sargento 2° de carabineros de la 39 Comisaría de El Bosque, en compañía de otro funcionario de la misma unidad, quienes patrullaba en un radio patrulla por el sector, en el ejercicio de sus

funciones. En dicho contexto, la víctima lanzó una patada contra el vehículo policial, increpando a los funcionarios, ante lo cual URRUTIA GARCÉS descendió del móvil, iniciando una persecución de infantería, dándole alcance a Erwin Retamales León en una feria del sector ubicada en calle Los Carolinos, donde, abusando de su cargo y con la finalidad de castigarlo por su accionar precedente, procedió a golpear a este último en reiteradas ocasiones con patadas en su rostro, violencia ejercida contra la víctima sin justificación y en forma contraria a todo protocolo que regla el accionar policial, provocándole un grave sufrimiento evidenciado en las siguientes lesiones: fractura del ala mayor del esfenoides a derecha en la pared posterior de la órbita, sin desplazamiento de fragmentos óseos, fractura de margen inferior de la lámina papirácea derecha con enfisema orbitario, fractura de las paredes anterior y posterior del seno maxilar izquierdo contenido hemático en las cavidades nasales, fractura de apófisis pterigoides bilaterales y aumento de volumen de las partes blandas periorbitarias bilaterales, fractura le fort I", lesiones de carácter grave según informe evacuado por el Servicio Médico Legal."

Los hechos anteriormente descritos, a juicio del Ministerio Público constituyen el delito de tortura previsto y sancionado en el artículo 150 A del Código Penal, en grado de desarrollo consumado, y en el que cabe participación al imputado en calidad de autor (acción desplegada contra la víctima Erwin Retamales León.

Que, en opinión del Ministerio Público, el delito materia de la presente acusación, se encuentra en grado de desarrollo de consumado, y atribuyendo al acusado participación en calidad de autor del delito que se le imputa, de acuerdo al artículo 15 N° 1 del Código Penal.

Señala además que concurre la circunstancia modificatoria contemplada en el artículo 11 N° 6 del Código Penal, esto es, la atenuante de irreprochable conducta anterior.

Son aplicables los siguientes preceptos legales: Artículos 1°, 14 N° 1, 15 N° 1, 18, 29, 31, 32, 47, 50, 67, 68, 69, 456 bis A del Código Penal; Artículo 47, 259 y siguientes, 314 y 315 del Código Procesal Penal.

El Ministerio Público solicita que se condene al acusado a la pena de 7 años de presidio mayor en su grado mínimo, además de las accesorias legales del artículo 28 del Código Penal, y las costas de la causa.

TERCERO: Que la querellante Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), dedujo acusación particular cuyo tenor es el siguiente:

“El día 19 de octubre del año 2019 alrededor de las 14:00 horas en Gran Avenida José Miguel Carrera, intersección con Avenida Central, en la comuna de El Bosque, mientras la víctima don ERWIN BASTIÁN RETAMALES LEÓN participaba en una manifestación en dicho lugar, llegó al lugar el imputado ANDRÉS HENRY URRUTIA GARCÉS, Sargento 2° de carabineros de la 39 Comisaría de El Bosque, en compañía de otro funcionario de la misma unidad, quienes patrullaba en un radio patrulla por el sector, en el ejercicio de sus funciones. En dicho contexto, la víctima lanzó una patada contra el vehículo policial, increpando a los funcionarios, ante lo cual URRUTIA GARCÉS descendió del móvil, iniciando una persecución de infantería, dándole alcance a Erwin Retamales León en una feria del sector ubicada en calle Los Carolinos, donde, abusando de su cargo y con la finalidad de castigarlo por su accionar precedente, procedió a golpear a este último en reiteradas ocasiones con patadas en su rostro, violencia ejercida contra la víctima sin justificación y en forma contraria a todo protocolo que regla el accionar policial, provocándole un grave sufrimiento evidenciado en las siguientes lesiones: fractura del ala mayor del esfenoides a derecha en la pared posterior de la órbita, sin desplazamiento de fragmentos óseos, fractura de margen inferior de la lámina papirácea derecha con enfisema orbitario, fractura de las paredes anterior y posterior del seno maxilar izquierdo contenido hemático en las cavidades nasales, fractura de apófisis pterigoides bilaterales y aumento de volumen de las partes blandas periorbitarias bilaterales,

fractura le fort I” lesiones de carácter grave según informe evacuado por el Servicio Médico Legal.”

Los hechos descritos anteriormente son constitutivos del delito de Tortura contemplado en el artículo 150 A del Código Penal, el cual se encuentra en grado de desarrollo consumado, en atención al artículo 7° del Código Penal, cometidos en contra de la víctima Erwin Bastián Retamales León y respecto del cual le cabe participación al acusado, Andrés Henry Urrutia Garcés, en calidad de autor en conformidad a lo establecido en el artículo 15 números 1° del Código Penal.

En opinión de esta parte para el acusado no concurren circunstancias modificatorias de responsabilidad.

Son aplicables al caso los siguientes preceptos legales: artículos 1, 3, 7, 14 N°1, 15 N°1, 21, 22, 24, 25, 28, 31, 50, 68, 69, artículo 150 A, todos del Código Penal; artículos 259, 260 y 261 del Código Procesal Penal; artículo 5° inciso segundo de la Constitución Política de la República y lo dispuesto en la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

Solicita se condene al acusado a la pena de 7 años de presidio mayor en su grado mínimo, además de las accesorias legales del artículo 28 del Código Penal, y las costas de la causa.

CUARTO: Que, por su parte, el Consejo de Defensa del Estado, dedujo acusación particular en los siguientes términos:

“El día 19 de octubre del año 2019, alrededor de las 14:00 horas, en la intersección de Gran Avenida José Miguel Carrera con Avenida Central, comuna de El Bosque, en circunstancias que la víctima, ERWIN BASTIÁN RETAMALES LEÓN, participaba en una manifestación en dicho lugar, se aproximó al lugar un vehículo policial de dotación de la 39° Comisaría de Carabineros de El Bosque, que era tripulado por el imputado ANDRÉS HENRY URRUTIA GARCÉS, Sargento

2° de carabineros, en compañía de otros funcionarios de la referida unidad policial, quienes patrullaban por el sector, en el ejercicio de sus funciones.

En dicho contexto y al aproximarse el vehículo policial a los manifestantes, la víctima lanzó una patada contra el vehículo policial, increpando a los funcionarios, ante lo cual el móvil detuvo su marcha, descendiendo del mismo ANDÉS URRUTIA GARCÉS, quien inició una persecución de infantería de la víctima por calle Los Carolinos, logrando dar alcance a ERWIN RETAMALES LEÓN en una feria del sector, lugar en que el imputado, abusando de su cargo o sus funciones, aplicó tratos crueles y degradantes a la persona de la víctima, procediendo a golpear a ésta en reiteradas ocasiones con patadas en su rostro, violencia ejercida contra la víctima sin justificación y en forma contraria a todo protocolo que regla el accionar policial, provocándole un grave sufrimiento evidenciado en las siguientes lesiones: “fractura del ala mayor del esfenoides a derecha en la pared posterior de la órbita, sin desplazamiento de fragmentos óseos, fractura de margen inferior de la lámina papirácea derecha con enfisema orbitario, fractura de las paredes anterior y posterior del seno maxilar izquierdo contenido hemático en las cavidades nasales, fractura de apófisis pterigoides bilaterales y aumento de volumen de las partes blandas periorbitarias bilaterales, fractura le fort I”, lesiones que, de acuerdo a informe evacuado por el Servicio Médico Legal, son de carácter grave.

Los hechos descritos configuran los delitos de apremios ilegítimos, previsto y sancionado en el art. 150 D incisos 1° y 2° del Código Penal, en concurso ideal con el delito de lesiones graves, previsto y sancionado en el art. 397 N°2 del Código Punitivo, ya que las lesiones produjeren al ofendido enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de treinta días.

Cada uno de los delitos materia de esta acusación particular se encuentran en grado de ejecución de consumados, en conformidad a lo dispuesto en los artículos 7 y 50 del Código Penal, toda vez que el acusado ha ejecutado la totalidad de las conductas típicas exigidas por cada tipo penal, atribuyéndose a

éste participación en calidad de autor, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 15 N° 1 del Código Penal.

A juicio de este querellante y acusador particular, concurre respecto del imputado la circunstancia atenuante de responsabilidad criminal contemplada en el artículo 11 N°6 del Código Penal.

Son aplicables a los hechos materia de la presente acusación las siguientes disposiciones legales: artículos 1°, 2°, 5°, 7°, 11, 14, 15, 18, 21, 24, 28, 29, 31, 47, 50, 67, 68, 69, 75, 150 D y demás pertinentes del Código Penal.

Respecto del procedimiento se hacen aplicables las disposiciones de los artículos contenidos en el Libro II y especialmente las disposiciones de los artículos 259 y 261 del Código Procesal Penal.

Atendido lo precedentemente expuesto y de conformidad a los artículos 14 N°1, 15 N°1, 21, 25, 28, 31, 56, 67, 68, 69 y 150 D del Código Penal, solicita se imponga al acusado Andrés Henry Urrutia Garcés las siguientes penas: La pena de siete (7) años de presidio mayor en su grado mínimo, accesorias legales del artículo 28 del Código Penal de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, solicitando se les condene al pago de costas de la causa de acuerdo al artículo 45 del Código Procesal Penal y, una vez ejecutoriada la respectiva sentencia, se ordene la incorporación de sus huellas genéticas en el registro de condenados de acuerdo a lo establecido en la Ley 19.970, en su calidad de autor de los delitos consumados de Apremios Ilegítimos, previsto y sancionado en el art. 150 D incisos 1° y 2° del Código Penal, en concurso ideal con el delito de lesiones graves, previsto y sancionado en el art. 397 N°2 del Código Punitivo, cometidos en contra de la víctima Erwin Bastián Retamales León.

QUINTO: Que no hubo convenciones probatorias.

SEXTO: Que, una vez iniciado el juicio oral, y como primera incidencia planteada por la defensa del acusado, y sin que existiera oposición de los acusadores presentes en estrados, **se declaró el abandono de la querella interpuesta en representación de la víctima por la Agrupación de Defensores de Derechos Humanos**, conforme lo dispuesto en el artículo 288 del Código Procesal Penal.

SEPTIMO: Que en su **alegato de apertura, el persecutor** reprodujo los hechos de la acusación, los que ofreció acreditar, al igual que la participación del acusado, mediante la prueba de cargo ofrecida en el auto de apertura, reiterando la pretensión de condena expresada en la acusación por el delito de torturas, debido a la conducta abusiva que ejerció sobre la víctima, la que no sólo resultó lesionada de gravedad en su cara, sino también, se vio afectada su salud mental, por el sufrimiento psicológico que dicho evento le ocasionó, dado que no había motivo alguno para que fuera castigado de esa forma por el acusado, conducta que, a su juicio, es constitutivo del delito por el cual se le acusó.

A su turno, el representante del Consejo de Defensa del Estado – en adelante, CDE- adelantó que la prueba permitiría acreditar los hechos de su acusación -que son idénticos a los contenidos en la acusación fiscal-, y la participación del acusado en ellos, y la única diferencia es la calificación jurídica, pues en su concepto, estos hechos resultan constitutivos del delito de apremios ilegítimos del artículo 150 del Código Penal, en concurso con el delito de lesiones graves del 397 número 2 del mismo código, discrepancia que se sustenta en la dinámica del procedimiento y la forma y circunstancias en que fue agredido el afectado, tal cual lo revelará la prueba de cargo, especialmente la perito forense y la testigo presencial de los hechos.

Por su parte, la letrada del Instituto Nacional de Derechos Humanos – en adelante INDH-, invitó al tribunal a reflexionar acerca de la moderna conceptualización del delito de torturas, dejando atrás la mirada tradicional en la forma cómo se entendía este delito, esto es, como castigo a la disidencia política,

o un método de investigación penal propio de los antiguos procesos inquisitivos, sino más bien, en su actual concepto jurídico técnico, que por lo demás contienen los instrumentos internacionales ratificados por el Estado de Chile en esta materia, tales como, la Convención Contra la Tortura y otros Tratos Crueles e Inhumanos o Degradantes y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la tortura, sin perjuicio de lo que disponen en su nueva redacción los artículos 150 y siguientes del Código Penal, modificado por la Ley 20.968 del año 2016.

En este caso, el acusado atentó en contra de la dignidad de la víctima, humillándolo, degradándolo como persona mediante la violencia física y psicológica que devino de la agresión.

A su juicio, se dan en la especie todos los elementos del tipo penal de tortura, esto es, el sujeto activo especial, la conducta, la finalidad y la intencionalidad.

Finalmente, la defensa sostuvo que no se pueden violar los derechos humanos en nombre de los derechos humanos. Este es uno de los pilares fundamentales que sustentan precisamente lo que es la estructura básica del debido proceso y de la presunción de inocencia, dado que, cuando agentes estatales, Ministerio Público, Consejo de Defensa del Estado, Instituto Nacional de Derechos Humanos, despliegan todo su poderío respecto de un ciudadano, el respeto de dichas garantías es fundamental, como lo es también, el escrutinio de los Jueces, que son los garantes de lo que es esta estructura del debido proceso. Añadió que la investigación siempre se dirigió con visión de túnel, puesto que para el persecutor el responsable de las lesiones del ofendido necesariamente tuvo que ser el acusado, descartando otras líneas de investigación que aparecieron durante las pesquisas, sin mantener u observar la objetividad necesaria para esclarecer verdaderamente la dinámica de los hechos.

No se averiguó por qué razón los antecedentes médicos dan cuenta de lesiones de distinta naturaleza en el rostro del señor Retamales, ni la forma y circunstancias en que ellas se habrían originado. Asimismo, se le practicó una

pericia que nada tiene que ver con el Protocolo de Estambul, ya que, la evaluación contiene fases que no están estandarizadas por la norma internacional que contiene dicha herramienta.

Asimismo, al momento de ser evaluado por la doctora Negretti, el señor Retamales no presentaba lesiones de ninguna especie, y sus conclusiones se basan en la interpretación que ella hace luego de leer todos los antecedentes clínicos de la víctima, lo que parece más bien una metapericia.

La prueba no será suficiente para establecer fuera de toda duda, que las lesiones que presenta el afectado las causó su representado, es más, en las acusaciones se dice que habría recibido reiterados golpes, pero la prueba va a demostrar que sólo fue un golpe, y lo más importante, no se investigó el hecho de que esta persona sufrió una fuerte caída mientras corría para evitar ser alcanzado por su representado, evento que perfectamente podría explicar sus lesiones, lo que no se profundizó por el persecutor durante la investigación.

Finalmente, adelantó que la prueba sería insuficiente para determinar una posible participación delictual de su representado al momento en que ocurrieron los hechos, por lo que deberá ser absuelto de todos los cargos que le fueron formulados por los acusadores.

OCTAVO: Que en la oportunidad procesal pertinente, **y debidamente advertido de su derecho de guardar silencio, el acusado renunció a dicha prerrogativa y decidió prestar testimonio en el juicio**, expresando que el 19 de octubre del 2019 estaba en funciones en la 39° Comisaría de El Bosque, y alrededor de las 13 y 14 horas, mientras circulaba como copiloto en un vehículo institucional hacia el norte por Gran Avenida, al llegar a la esquina de Avenida Central ve que hay una manifestación pacífica en la acera, eran 20 a 30 personas, cuando de pronto un sujeto que portaba un tambor en sus manos, le dio una patada a la puerta del copiloto del radio patrulla, por lo que ante la flagrancia del delito descendió del carro para proceder a su detención, pero éste se dio a la fuga corriendo hacia la calle Los Carolinos, donde había una feria libre. Cuando iba a

unos 35 metros del sujeto, y más de 100 corriendo detrás de él, ve que alguien le hace una zancadilla cayendo el sujeto al suelo, y al tratar de detenerlo fue atacado por los transeúntes debido a que era la época del estallido social, de modo tal que tuvo que retirarse para no ser agredido, instante en que ve que una persona le iba a lanzar una piedra, debiendo extraer su arma de servicio, pero sin efectuar ningún disparo. No tuvo contacto físico con el sujeto que pateó el carro policial, y su intención era detenerlo por la patada al auto, de hecho, llamó a la patrulla pero no pudo ingresar por la feria, pero igualmente dejaron constancia del procedimiento en la hoja de ruta, reiterando que nunca tocó a esa persona porque comenzó a ser agredido e insultado por los transeúntes.

Al fiscal respondió que ignora por qué la víctima lo acusa de haberle dado patadas.

Al CDE señaló que a esa fecha pesaba 135 kilos y 1,88 de estatura. El ofendido era una persona joven de contextura normal, o sea, 1,70 y sin sobre peso. Fue agredido por los transeúntes cuando corría detrás suyo por la acera y no por la feria, y cuando esta persona cruzó hacia la feria es cuando le hacen la zancadilla, y cae al suelo. Al llegar al lugar de la caída, la gente comenzó a tirarle cosas porque a lo mejor creyeron que él lo había golpeado. De este procedimiento quedó constancia en la hoja de ruta y también dio cuenta por radio a la central de comunicaciones, informando que no había podido detener al sujeto por la violencia de que fue objeto, pero no informó al ministerio público de este hecho por carecer de antecedentes. Solo le tiraron objetos, y por eso fue que sacó su arma cuando advirtió que le iban a tirar una piedra. El joven estaba en el suelo, a unos dos metros de distancia, y él estaba concentrado en defenderse, por lo que no le vio lesión ni se percató de su estado.

Al INDH señaló que a esa fecha era cabo primero. Comenzó en el Grupo de formación de Concepción, después estuvo 7 años en la Primera Comisaría de Santiago, 2 años en la Novena Comisaría de Independencia, otros 2 años estudió y se tituló como Técnico Superior de Investigación Policial, luego estuvo 2 años en

la 39° Comisaría del Bosque, después en el Laboratorio de Criminalística como perito, y ahora está en la 12° Comisaría de San Miguel, en la Oficina de Órdenes Judiciales. Actualmente es Sargento II.

Ese día había una manifestación pacífica, según recuerda eran personas adultas, y no recibió agresiones, solo el sujeto que pateó la puerta del copiloto del vehículo policial. Estaba con el conductor Víctor Garrido Urrutia. No recuerda los datos exactos de la constancia radial, y reitera que no dio cuenta al ministerio público de estos hechos, pero sí de los demás que presencié como funcionario público. El ofendido estaba en el suelo y pidió cooperación vía radial pero sus compañeros no pudieron llegar al lugar por el estado de agitación social que había en ese momento.

A su defensa señaló que andaba con zapatos normales, uniforme normal y chaleco antibalas. No usaba bototos, sino zapatos convencionales. Cuando corría detrás de esta persona, alguien le hizo una zancadilla mientras escapaba, lo que hizo que esta persona cayera al suelo, llegando al lugar en donde estaba tirado. Es en ese momento en que los transeúntes le comienzan a lanzar objetos por lo que se tuvo que retirar, y si bien pidió cooperación, nadie llegó producto de la agitación y su patrulla tampoco pudo llegar porque había una feria.

NOVENO: Que, con el fin de acreditar los hechos descritos en sus respectivos libelos, **los acusadores incorporaron durante el juicio la siguiente prueba:**

Testimonial:

1.- Marco Constanzo Hidalgo, Teniente de Carabineros, Departamento de Asuntos Internos.

2.- Erwin Bastian Retamales León, Ingeniero audiovisual.

3.- Javiera Quevedo Antognoni, Profesora.

4.- Denisse Cayuqueo Leiva. Encargada de Logística.

5.- Ángel Álvarez León. Dueña de casa.

6.- Claudio Nova Herrera, Cabo Primero de Carabineros de Chile.
Departamento de Asuntos Internos.

7.- Víctor Garrido Urrutia, Cabo primero de Carabineros de Chile.

Pericial

1. Patricia Negretti Castro, perito médico del Servicio Médico Legal.

2. Sebastián Reyes Fredes, psicólogo forense del Servicio Médico Legal.

3. Claudio Peña Melo, perito documental perteneciente al Laboratorio de Criminalística de Policía de investigaciones (LACRIM).

4. Pablo Villena Avendaño, perito audiovisual del Laboratorio de Criminalística de Policía de Investigaciones.

Otros medios de prueba

1. 13 fotografías correspondientes a informe pericial audiovisual 3362021 elaborado por perito Pablo Villena de LACRIM.

2. DVD que contiene grabaciones aportadas correspondientes al lugar y día de los hechos, esto es, dos videos y set de tres fotografías.

3. 5 fotografías del sitio del suceso elaborado por el departamento de asuntos internos de carabineros (daicar) en informe 230.

Documental del Ministerio Público

1) Dato de atención de urgencia de fecha 19/10/2019 efectuado en el Hospital El Pino, relativo al paciente Erwin Bastián Retamales León; **2) Dato de atención de urgencia** número 2019-105504 de fecha 20.10.2019 efectuado en el Hospital Barros Luco a Erwin Bastián Retamales León; **3) Boletín de Resolución de Nombramiento** como personal de nombramiento institucional correspondiente al acusado.; **4) Hoja de vida institucional** del acusado de 4/02/2020; **5) Ficha de**

Consulta de Erwin Bastián Retamales León; 6) Certificado Proservipol; 7) Hoja de ruta.

Documental de la querellante INDH

A) Certificado médico, clínica Dávila, de fecha 24.10.19 firmado por la Dr. Carla Muñoz, de Erwin Retamales León; **B) TC de orbitas sin contraste**, de fecha 23.10.19 firmado por el Dr. Leonardo Arraño; **C) Licencia médica, N°3033175707-1** por 15 días, fecha de inicio 21.10.19; **D) Licencia médica, N°58361662** por 14 días, fecha de inicio 05.11.19; **E) Licencia médica, N° 58361667** por 14 días, fecha de inicio 19.11.19; **F) Epicrisis efectuada por el Hospital El Pino**, de fecha 20.10.19, suscrito por el medico Carlos Carrillo Rivas; **G) Informe tomográfico del Hospital del Pino**, de fecha 19.10.19 firmado por el Neuro Radiologo Paulo Fuentes Sandoval; **H) Certificado de atención ambulatoria** del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, de fecha 08.11.19 firmado por el médico Ariel Zivov Laufer; **I) Certificado de atención ambulatoria** Hospital Clínico de la Universidad de Chile, de fecha 15.11.19 firmado por el médico Cristóbal Chávez Sepúlveda; **J) Certificado de atención ambulatoria** de en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, de fecha 18.11.19 firmado por el médico Ariel Zivov Laufer; **K) Certificado de atención ambulatoria** en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, de fecha 23.12.19 firmado por el médico Ariel Zivov Laufer; **L) Circular N°1832 del 1 marzo de 2019**, publicada en el diario oficial de 4 de marzo 2019.

Prueba de la defensa

Pericial

Carmen Cerda Aguilar, médico, anatomopatóloga.

Otros medios de prueba

Set de 30 fotografías anexo al Informe Pericial.

Se deja expresa constancia que la información aportada por las probanzas antes singularizadas, se encuentra íntegramente contenida en el registro de audio del juicio oral a que se refiere este fallo, y por cierto, a disposición de todos los intervinientes, por lo que atento al mandato que imponen los artículos 36, 297 y 342 letras c) y d) del Código Procesal Penal, en los considerandos que siguen se expresarán los fundamentos de la decisión a la que llegaron estos Jueces, según el mérito que a cada una de ellas le fuera otorgado al momento de valorarlas conforme los parámetros que entrega el artículo 297 antes citado.

DECIMO: Que, tal como se anunció en el veredicto, luego del análisis y ponderación de toda la prueba incorporada al juicio, conforme los parámetros que impone el artículo 297 del Código Procesal Penal, estos Jueces arribaron a la convicción en el estándar que exige el artículo 340 del mismo texto legal, en cuanto a ***que el día 19 de octubre del año 2019, alrededor de las 14:00 horas, en las inmediaciones de la intersección de Avenida José Miguel Carrera y Avenida Central, en la comuna de El Bosque, en el contexto de una manifestación ciudadana, Erwin Bastián Retamales León propinó un golpe de pie a un vehículo policial que pasaba por dicho lugar, ante lo cual, el funcionario de Carabineros de Chile, Andrés Henry Urrutia Garcés, a esa fecha, cabo primero de dotación de la 39° Comisaría de El Bosque, descendió del móvil con el fin de detener a Retamales León, dándose éste a la fuga por las calles aledañas del sector para no ser alcanzado por Urrutia Garcés que corría detrás suyo, persecución que culminó en el interior de una feria libre ubicada en calle Los Carolinos, lugar en el que el aludido funcionario policial, abusando de su cargo y en el ejercicio de sus funciones, lo agredió mediante un golpe de pie en su cara, provocándole lesiones graves, según consta en los documentos expedidos por respectivos centros de salud, públicos y privados, que se encargaron de asistirlo inmediatamente de ocurrida la agresión.***

UNDECIMO: Que, en primer lugar, mediante la declaración consistente, coherente y plausible de la persona que se menciona como afectada en las respectivas acusaciones deducidas en este proceso, a saber, **Erwin Bastian Retamales León**, fue posible conocer de primera fuente el contexto temporal, espacial y social en que se produjeron los hechos materia del juicio, toda vez que, su testimonio fue cabalmente corroborado por los relatos entregados en juicio por la testigo **Denisse Cayuqueo Leiva, pareja del afectado, y por el Cabo primero de Carabineros, Víctor Garrido Urrutia, conductor del vehículo policial en que se transportaba ese día junto a su jefe de patrulla, el acusado Andrés Urrutia Garcés**, todos los cuales estuvieron contestes en que el día, a la hora y en el lugar indicados en la acusación, se desarrollaba una manifestación ciudadana en la vía pública en la que se encontraban presentes el afectado y su pareja, y que por ese lugar pasó un automóvil de Carabineros de Chile al que Retamales León le dirigió golpes de pie, provocando que el copiloto descendiera del carro con el fin de detenerlo, lo que hizo que el primero se diera a la fuga corriendo por las calles del sector siendo seguido por el funcionario policial, **información que al emanar de sus protagonistas directos se estimó dotada de mérito para tener por cierta la efectiva ocurrencia de esta parte de los hechos descritos en los libelos acusatorios, tanto del Ministerio Público como de los dos querellantes particulares, el CDE y el INHD.**

Asimismo, mediante la **declaración consistente y coherente del afectado**, corroborada, en lo sustancial, por los relatos de **las testigos Javiera Quevedo Antognoni y Ángel Álvarez León**, fue posible tener por cierto, además, que luego de los golpes de pie dirigidos por Retamales León hacia la puerta del radio patrullas, y que el acusado descendiera del vehículo con el fin de aprehenderlo por dicha conducta, se inició una persecución que se extendió por, a lo menos unos 100 metros, carrera que culminó en el interior de una feria libre instalada en la calle Los Carolinos, por cuanto Retamales León cayó al suelo debido a la zancadilla que le hiciera una tercera persona no identificada, accidente que le permitió al acusado darle alcance y acto seguido propinarle un golpe de pie

en la cara, luego de lo cual se vio obligado a retirarse sin conseguir la detención de Retamales León, ya que comenzó a ser increpado en duros términos por un grupo de personas que se encontraban presentes allí en ese momento, narraciones que se apreciaron honestas y verídicas en la medida que sobre este episodio no se advirtieron mayores diferencias entre sus relatos, y si bien, la defensa se encargó de destacar algunas en su clausura, ellas carecieron de la entidad suficiente para desvirtuar lo esencial de sus testimonios, esto es, que Retamales León resultó lesionado debido a la agresión recibida por parte del Carabinero que llegó hasta el sitio en donde trataba de levantarse, perdiendo el conocimiento, resultando con lesiones que requirieron ese mismo día atención médica en el Hospital El Pino, y posteriormente en distintos centros asistenciales de la capital, **información que fue ratificada con el mérito de la documental** aparejada por el persecutor estatal y la querellante del INDH.

Todo lo expuesto por el ofendido en su declaración, y que fuera ratificado, en lo sustancial y pertinente, por los relatos de las testigos civiles antes individualizadas, se vio plenamente corroborada, además, con **la declaración consistente y coherente del Teniente de Carabineros Marco Constanzo Hidalgo, funcionario a cargo de las pesquisas de estos hechos**, funcionario que a partir de **una fotografía captada días después por la pareja del afectado** con su celular, al ver y reconocer al acusado en el frontis de un supermercado del sector, cuya identidad, según el parche adosado en la parte superior de su uniforme era “A. Urrutia”, funcionario que correspondía al Cabo primero Andrés Urrutia Garcés, de dotación de la 39° Comisaría de El Bosque, quien de acuerdo al **certificado “Servipol”** recabado por este oficial, el día 19 de octubre del 2019 se encontraba de servicio de primer turno, como jefe de patrulla, junto al cabo segundo Víctor Garrido Urrutia en el vehículo institucional RP 2298, y cuyo recorrido y desplazamiento, según la información contenida en la **SIMCAR y el GPS del móvil**, los situaron en el lugar y a la hora del incidente referido por el ofendido, y a cuyo respecto existía registro manuscrito en **la hoja de ruta**, siéndole imposible conocer la integridad de lo allí consignado debido a lo ilegible

de la letra, dificultad que fue superada gracias al trabajo desarrollado por el **perito Claudio Peña Melo**, quien reveló a los Jueces que en dicho documento sólo se registró el incidente referido por el afectado, y que no había sido posible conseguir su detención, sin referir nada de la persecución y posterior agresión, secuencia a la que si se refirieron los testigos **Quevedo Antognoni, Cayuqueo Leiva y Álvarez León**, narraciones que resultaron coincidentes y complementarias al momento de describir esa parte de la acusación y cuyos términos se vieron plenamente confirmados mediante las **imágenes de video y las fotografías explicadas por el perito Pablo Villena**, probanzas que por su consistencia, concordancia y objetividad permitieron apreciar el rostro del afectado, quien aparece tendido en el suelo, y luego al acusado en la vía pública, a quien un grupo de pobladores lo insulta por haber golpeado al afectado, y que en un instante el acusado extrae su arma de fuego y apunta hacia el grupo para poder retirarse ileso de allí.

Para los Jueces, este último antecedente probatorio resultó relevante y decisivo para la convicción manifestada en el veredicto, por cuanto corrobora la veracidad de la información entregada en estrados por la víctima y por los testigos civiles antes mencionados, especialmente lo relatado por Javiera Quevedo, dado que en el **video analizado por el perito Villena** fue posible conocer de primera fuente la reacción de los transeúntes que se encontraban en la feria libre el día de los hechos, **puesto que en dicho material no sólo se ve, sino que también se escucha nítidamente**, sin interferencias ni distorsiones, que la gente increpa al carabinero que aparece en las imágenes -fuera de toda duda el acusado- por haberle pegado a una persona, que no puede ser otra que Retamales León, **a quien fue posible ver en otro video cuando estaba en el suelo producto del golpe** recibido momentos antes, y cuyo responsable, según la gente que se ve y escucha en el primer video, era el acusado Urrutia Garcés, a quien conminaban mediante insultos de distinto calibre a retirarse del lugar, debiendo éste incluso, extraer su arma de servicio con la que apuntó al grupo ante el temor de que aumentara el nivel de violencia de la gente poniendo en peligro su integridad

física, dinámica que de no haber ocurrido la agresión que se le reprochaba, claramente esta reacción no habría existido, sin perjuicio del estado de agitación social y el ambiente convulsionado que se apoderó de la ciudadanía a partir del fenómeno denominado como “estallido social”, contexto en que es verdad que se verificaron innúmeras acciones violentas, muchas de ellas extremadamente desmedidas en contra de los funcionarios de carabineros, pero claramente este no fue el caso, dado que, en el aludido video se escucha claramente que los gritos e insultos que la poblada dirigía hacia el carabinero eran por haber golpeado al joven, gritos del mismo tenor que escuchó la hermana del afectado, y que por ser locataria de la feria, hizo que se dirigiera hacia el lugar desde provenían los gritos, percatándose que era su hermano a quien había golpeado un carabinero, **funcionario de uniforme a quien fue posible ver a muy corta distancia del afectado cuando yacía en el suelo en una de las fotografías exhibidas durante el juicio** al teniente Constanzo, lo que desmiente su afirmación de haber no haberse acercado al joven, sino que habría permanecido, aproximadamente, a unos dos metros de distancia.

Todo lo que se apreció en las imágenes fotográficas y en los videos exhibidos durante el juicio explica, de manera razonable y plausible, la variada información consignada en la abundante **prueba documental aportada por el Ministerio Público y el INDH**, material probatorio que no merece reproche por emanar de los establecimientos de salud, públicos y privados, en donde Retamales León manifestó haber recibido atención médica, con motivo de la agresión recibida el día, a la hora y en el lugar indicado en la acusación, lesiones que la **doctora Patricia Negretti Castro, perito forense del Servicio Médico Legal**, se encargó de explicar detalladamente, trabajo que se apreció íntegro, válido y objetivo, al provenir de una profesional cuya experiencia en la materia no admite reproches, aun cuando el análisis de las lesiones físicas provocadas al ofendido que le fuera requerido obedeciera a otra finalidad, siendo del caso destacar en esta parte que, **ni el abogado defensor, ni la perito Carmen Cerda**, cuestionaron la existencia de las lesiones que le fueron provocadas al ofendido

con motivo de los hechos que motivaron este proceso, sino tan sólo la causa o el origen de las mismas, y las deficiencias protocolares en que incurrieron los profesionales de la salud que atendieron a la víctima en las distintas entidades en que éste se presentó o fue derivado, **alegaciones que fueron desestimadas por el Tribunal, según las razones que están contenidas en lo que sigue de este fallo.**

Finalmente, no hubo duda alguna que, a la fecha de los hechos materia del juicio, **el acusado Andrés Henry Urrutia Garcés, ostentaba el grado de Cabo primero de Carabineros de Chile**, según consta en la **hoja de vida y resoluciones de nombramiento aparejados por el persecutor**, y que el día de los hechos, se desempeñaba en la 39° Comisaría de El Bosque y estaba de patrullaje de primer servicio en el RP 2298 junto al Cabo segundo Víctor Garrido Urrutia, además de lo expuesto por el teniente Constanzo.

DUODECIMO: Que estos hechos, en concepto del tribunal, se encuadran jurídicamente en **el delito de apremios ilegítimos del artículo 150 D del Código Penal, y no en el ilícito de torturas descrito en la letra A de la misma disposición legal**, por cuanto los hechos que fue posible tener por establecidos conforme a lo explicado en los considerandos anteriores, no comprenden la totalidad de los requisitos exigidos por la norma legal que contiene este tipo delictivo, según se pasa a explicar.

El artículo 150 letra A) del Código Penal, siguiendo los lineamientos y parámetros que entregan los ordenamientos internacionales que previenen esta conducta, entre otros, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, señala que se entenderá por tortura, todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos, sexuales o psíquicos, con el fin de obtener de ella o de un tercero información, declaración o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se le impute haber cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona, o en razón de una discriminación fundada en motivos tales como la

ideología, la opinión política, la religión o creencias de la víctima; la nación, la raza, la etnia o el grupo social al que pertenezca; el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, la edad, la filiación, la apariencia personal, el estado de salud o la situación de discapacidad.

Agrega la norma, que se entenderá también por tortura, la aplicación intencional de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima, o a disminuir su voluntad o su capacidad de discernimiento o decisión, con alguno de los fines referidos en el inciso precedente.

En el presente caso, tanto en la acusación fiscal, como en la presentada por el INDH, se sostiene que Urrutia Garcés, abusando de su cargo, sin justificación, y en forma contraria a todo protocolo que regla el accionar policial, golpeó a Retamales León en reiteradas ocasiones con patadas en su rostro, provocándole un grave sufrimiento, a título de castigo, por haber lanzado una patada a una de las puertas del vehículo policial en que se transportaba la patrulla al mando del acusado.

Como se dijo antes, en concepto de los sentenciadores, la prueba de cargo traída al juicio por estos acusadores no alcanzó el estándar suficiente para tener por acreditados todos los elementos del tipo en estudio, al tenor de lo que dispone la norma legal antes citada.

Esta conclusión se apoya en que, **de acuerdo a lo narrado por el afectado**, ese día participaba en una manifestación social en la vía pública, lugar en el que hizo aparición un automóvil de carabineros, uno de cuyos espejos le golpeó un brazo, por lo que, en señal de protesta y por la rabia del momento le profirió insultos y le tiró unas patadas al auto, ante lo cual el vehículo se detiene y de él baja un funcionario que se dirige hacia él, por lo que escapa corriendo hacia Los Carolinos en donde había una feria, cayendo al suelo porque una señora le hace una zancadilla, instante en que al voltear su cabeza, ve al funcionario de carabineros muy cerca suyo, en una posición como de patear una pelota y que a su cara se acerca su zapato, yéndose a negro (sic), que perdió el conocimiento, y

que al despertar estaba en el suelo, le dolía la cara, vomitó sangre, escuchaba gritos y gente lo ayudaba, apareciendo su hermana y luego su pareja, para finalmente dirigirse al hospital El Pino, luego al Barros Luco, al día siguiente a la clínica Dávila y finalmente al hospital de la Universidad de Chile, debido a que resultó con una fractura en el hueso maxilar, lesión que consta en la prueba documental traída al juicio, y debidamente explicada por la doctora Negretti a propósito de la aplicación del Protocolo de Estambul a la víctima.

De lo relacionado precedentemente, fue la opinión de los Jueces que, por una parte, la prueba de cargo sólo permitió tener por acreditado un golpe de pie, y no golpes reiterados, como lo plantea la acusación fiscal y la del INDH, y por otra, que la dinámica generada por la reacción del ofendido momentos antes, y que provocó la persecución del acusado, revela que el motivo del golpe de pie propinado por éste, y que alcanzó su mandíbula, no tenía por finalidad castigarlo intencionalmente por haber golpeado o intentar golpear el vehículo policial, sino más bien, se trató de un acto o acción instintiva, irracional, no meditada y que se vio facilitada por la circunstancia fortuita de que la persona a quien trataba de dar alcance para detenerlo cayó al suelo producto de un obstáculo sorpresivo que le interpuso una tercera persona, por lo que aprovechando ese momento y la posición en que se encontraba su objetivo, apenas lo tuvo a su alcance lo agredió sin pensar en las consecuencias, tal vez, porque sabía que por su contextura y la distancia que había corrido, no tenía posibilidades de alcanzarlo, a no ser por la repentina intervención de la persona que le opuso una zancadilla a su carrera, desahogando su impotencia mediante ese golpe de pie, en la forma que lo describió el ofendido, quien fue extremadamente gráfico al sostener que lo vio acercarse y adoptar una posición corporal semejante al que va a lanzar una patada, viendo acercarse a su cara el zapato del carabinero, siendo informados los jueces de lo que sucedió después de este hecho, esto es, la reacción virulenta de la gente en contra del agresor al que mediante insultos y gritos le reprochaban dicho acto obligándolo a salir del sector, tal cual se vio en el video reproducido durante el juicio.

Así explicado este momento, crucial para la resolución del caso traído a juicio, los sentenciadores no advirtieron que la motivación del acusado para golpear a la víctima, haya sido castigarlo por la o las patadas que éste le dio o le habría dado a la puerta del carro policial, antecedente sobre el cual se hace necesario dejar en claro, no se trajo prueba alguna para acreditar que el Radio Patrullas presentara daños, circunstancia que los Jueces también consideraron para descartar que hubiera sido el castigo la motivación del acusado para agredir a la víctima, a quien ni siquiera intentó detener, ya que, luego de la agresión fue reprendido mediante insultos por un grupo de personas que se encontraban allí, viéndose obligado a retirarse para no exponer su vida o integridad física, repliegue en el que debió incluso hacer uso de su arma de servicio.

A lo anterior se debe añadir como un antecedente más para desechar la calificación jurídica propuesta por el Ministerio Público y el INDH, la coincidencia de los Jueces respecto a que **el Protocolo de Estambul al que se sometió al ofendido no sirvió a los fines de dichos acusadores**, primero, porque a la fecha de realización de dicho instrumento, **y según lo informado por la doctora Negretti**, Retamales León ya no presentaba signos físicos de las lesiones que sufrió en su cara, y segundo, por cuanto fue posible advertir que su aplicación no se ajustó a los términos contemplados en el documento internacional que lo regula, ya que, por una parte, dicho estudio requiere la presencia no sólo del encargado de verificar la existencia de las lesiones físicas, sino también del profesional a cargo de pesquisar la aflicción emocional de la víctima y la relación existente entre ambas, cuyo no fue el caso, tal cual lo corroboró el **psicólogo Sebastián Fredes Reyes**, y que incluso reveló y reiteró en estrados, que la fiscalía no le había pedido un Informe de Estambul(sic), sino una pericia psicológica, aseverando que por lo mismo, su trabajo no calificaba como Protocolo de Estambul.

Por otra parte, se debe tener presente que la Ley 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, en su artículo 2°, refiere que el personal de Carabineros de Chile es esencialmente obediente, no deliberante, profesional,

jerarquizado, disciplinado y su personal estará sometido a las normas básicas establecidas en la presente ley orgánica, su estatuto, Código de Justicia Militar y reglamentación interna.

A su turno, el Decreto N° 1364 de 13 de noviembre de 2018 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, **y la circular N° 1832 de 1 de marzo de 2019 de la Dirección General de la institución**, vigente a la fecha de los hechos e **incorporada al juicio por la querellante INDH**, dan cuenta de la forma y en qué caso los funcionarios policiales pueden hacer uso de la fuerza, señalando los principios para el uso de la fuerza, la que sólo debe aplicarse cuando sea estrictamente necesaria y en la medida requerida para el desempeño de las funciones policiales, de modo tal que personal de Carabineros, en el cumplimiento de sus tareas profesionales deben aplicar, en la medida de lo posible, medios no violentos antes de recurrir al uso de la fuerza, tales como la utilización de tácticas de persuasión, negociación y mediación, y sólo cuando fuera necesario, emplear la fuerza mediante la utilización de los elementos o la adopción de las acciones de manera gradual y proporcional para el logro de sus objetivos. A su turno, deben respetarse los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad.

Por tanto, la conducta de agredir con un golpe de pie en la cara a la víctima, no se encuentra contemplado como una técnica o movimiento de reducción e inmovilización, ajena asimismo a cualquier práctica o protocolo de ejercicio de la función policial.

Finalmente, respecto de este punto, se indica que “los funcionarios policiales no podrán hacer uso de la fuerza en contra de personas detenidas, salvo cuando sea estrictamente necesario para concretar la detención, para mantener el orden en las unidades policiales o cuando esté en peligro la integridad física de alguna persona, como asimismo, se encuentra absolutamente prohibido ejercer cualquier acto constitutivo de tortura, tratos inhumanos o degradantes en contra de

las personas que se encuentren sometidas en cualquier condición al control o actuar policial.

En síntesis, de la dinámica de los hechos descrita por el afectado y los testigos de cargo, y el contexto en que ellos se desarrollaron, aparece claro y fuera de toda duda que la conducta desplegada por el acusado resultó claramente desproporcionada e innecesaria, considerando que la víctima se encontraba en el piso y totalmente indefenso, sin que hubiera motivo alguno para que fuera agredido de la manera como se informó a los Jueces, ya que, en la posición que tenía la víctima, bien pudo el acusado proceder a su detención, ya por sí mismo, o con la cooperación de otros funcionarios de carabineros, respetando de esta manera la conducta que le es exigible acorde su investidura, formación, obligaciones e instrucciones internas, y no actuar como lo hizo, esto es, desplegando una violencia innecesaria y excesiva, atendido la naturaleza y entidad de las lesiones causadas a la víctima.

Por las razones antes expuestas fue que el **Tribunal arribó a la convicción, bajo el estándar legal, de que los hechos establecidos en el motivo décimo de esta sentencia, son constitutivos del ilícito que contiene el artículo 150 D. del Código Penal**, esto es, del delito de apremios ilegítimos, no obstante la gravedad de las lesiones inferidas a la víctima, ya que, tal como se dijo más arriba, la prueba de cargo no resultó suficiente para demostrar, fuera de toda duda, que el acusado golpear a la víctima para castigarlo, sino más bien, lo entendieron como un acto irracional e instintivo, propio de la dinámica en que se desarrollaron los acontecimientos, esto es, que un funcionario de Carabineros de Chile, en los momentos que se hallaba de servicio y en cumplimiento de sus funciones, propinó a un civil un golpe de pie en su cabeza apartándose de toda la normativa que regula el accionar de esta institución de orden y seguridad, acción totalmente desproporcionada y abusiva, de acuerdo a la información proporcionada por el afectado y una testigo directa de dicho momento, accionar que no es dable permitir a la luz de la normativa que regula el proceder de los integrantes del cuerpo de Carabineros de Chile.

DECIMO TERCERO: Que, de la manera antes explicada, **los sentenciadores acogieron parcialmente el encuadre jurídico propuesto en su acusación por el CDE**, quien planteó en su libelo que los hechos de su acusación particular, cuya descripción es idéntica a la contenida en las demás acusaciones, eran constitutivos **del delito de apremios ilegítimos del artículo 150 D. del Código Penal, en concurso ideal con el delito de lesiones graves del artículo 397 N° 2 del mismo cuerpo legal, tesis que fue desestimada**, por cuanto, si bien se trata de una acción única que, eventualmente, podría configurar dos delitos, lo cierto es que el concurso ideal requiere que ambos tipos penales no se rechacen, descarten o marginen entre sí, lo que evidentemente ocurre en este caso, ya que al valorar los elementos fácticos de los ilícitos referidos por este querellante, resulta evidente que el delito de apremios ilegítimos excluye al de lesiones graves desde el momento en que el artículo 150 D. a diferencia del artículo 397 N° 2, requiere para su existencia, un sujeto activo calificado - empleado público-, por lo que para estos Jueces, más que un concurso ideal, se trataría de un concurso aparente de leyes penales, que en este caso, se resuelve por el principio de especialidad, conforme lo expresado en las líneas anteriores.

DECIMO CUARTO: Que, **en lo que atañe a la participación del acusado en los hechos materia del juicio oral**, y no obstante que en los razonamientos anteriores estos Jueces ya se han referido a su persona como el autor de la agresión y las lesiones provocadas a la víctima como consecuencia de la misma, igualmente se hace necesario profundizar en este acápite, en la medida que la solicitud de absolución de su defensa se basa principalmente en la falta de participación de su representado en los hechos descritos en las acusaciones contenidas en el auto de apertura, pretensión que se apoya en los siguientes argumentos vertidos en su alegato de clausura, algunos de los cuales ya fueron abordados en los razonamientos anteriores:

1.- El Ministerio Público desatendió la presunción de inocencia que tanto la Constitución Política de la República como diversos instrumentos internacionales reconocen a su representado, ya que, hubo aspectos o circunstancias que no se

investigaron debido a que el persecutor actuó con visión de túnel al enfocarse solamente en su representado, desestimando otras líneas de investigación.

Sobre este punto se hace necesario recordar que, en primer lugar, los Jueces de esta sede jurisdiccional solo pueden considerar y valorar la prueba ofrecida en el auto de apertura e incorporada al juicio por los intervinientes, de manera tal que no es dable pronunciarse sobre las diligencias, pesquisas o actuaciones ordenadas o practicadas durante la fase de investigación, en la que por cierto, la defensa tiene derecho a participar si en su concepto la investigación se aparta de los fines de la misma, asunto que no es de competencia de los Jueces Orales. Por lo mismo, no resulta pertinente emitir pronunciamiento acerca de lo que no se trajo al juicio, impulso que escapa a sus atribuciones legales.

Sin perjuicio de lo anterior, el principio de inocencia constituye uno de los pilares sobre los cuales se construye nuestro sistema de enjuiciamiento penal, y su respeto y observancia resulta siempre obligatorio para todos los Jueces de la especialidad, y su inobservancia será siempre motivo de impugnación por los intervinientes mediante el sistema recursivo que les ofrece la normativa legal.

2.- El afectado incurre en contradicciones para explicar su caída. No hay lesión en su hombro que demuestre sus dichos, ni en sus manos ni en sus rodillas sino sólo en el rostro. Su caída fue en velocidad y producto de una zancadilla, obstáculo que lo hizo caer de bruces. En la foto se ve al carabinero con un radio transmisor en su mano, sin observar golpe o agresión. La doctora Negretti descartó que las lesiones hayan sido provocadas por más de un golpe, y el video no prueba que haya sido él quien lo agredió. Javiera Acevedo(sic) dice que no ve al carabinero con la radio, sin embargo, en el video y en una foto se le ve claramente con dicho objeto.

Sobre estas alegaciones, sólo basta recordar que el afectado explicó en más de una oportunidad la forma en como fue que cayó al suelo, esto es, como en una especie de rodada apoyando primero su hombro, y que luego quedó como en cuclillas, con las manos y rodillas como punto de contacto con el suelo, sin

mencionar que en su caída se hubiera golpeado la cara, lo que explica y justifica que en los datos de atención de urgencia no se consignaran lesiones en dichas zonas corporales, a lo que se suma que acerca de la velocidad no hubo prueba alguna que permitiera determinar la velocidad que traía el afectado en su carrera, siendo del caso recordar que éste señaló que al ingresar a la feria, se le dificultó el desplazamiento porque empezó a chocar con la gente que estaba allí, lo que permite razonablemente concluir que al momento de la zancadilla, su velocidad era ínfima y por ello es que pudo de alguna manera controlar su caída logrando quedar en una posición de gateo, instante en que al voltear su cara ve al acusado dirigir su pie hacia su cara, misma escena que vio y describió la **testigo Javiera Quevedo**, dinámica que explica el motivo de la reacción que fue posible ver y escuchar en el video exhibido en el juicio, escena que a su turno ratificaron la hermana y la pareja del afectado, **agregando la primera** que al escuchar gritos se acercó al lugar desde donde provenían y vio a su hermano en el suelo, escuchando que la gente decía que el carabinero que estaba a su lado lo había golpeado, información que en el mismo sentido recibió la segunda al llegar a la feria, relatos que por su coincidencia y concordancia no admiten cuestionamientos al provenir de personas que estaban en lugares distantes, sin advertir nada fuera de lo común que el afectado se dirigiera a su casa y que luego Javiera Quevedo lo trasladara en su vehículo al Hospital El Pino, reacción y disposición digna de admirar y que tal vez se justifica en el impacto que le pudo provocar la forma en que esta persona fue golpeada por el acusado, sin que el valor otorgado a su testimonio se vea opacado o mermado por el hecho de haber referido en estrados que el carabinero golpeó en más de una oportunidad al afectado, y que no mantenía una radio en sus manos, por tratarse de detalles circunstanciales que no alteran la sustancialidad de su versión en tanto testigo presencial del momento mismo en que Retamales León fue agredido por el acusado, **al que por cierto reconoció en estrados como el autor.**

Por otra parte, si bien es efectivo que el video tantas veces mencionado no muestra el momento de la agresión que se le imputa al acusado, ello resulta obvio

y razonable, ya que dicho material fue captado con posterioridad a ese momento, circunstancia que no altera el valor probatorio que le otorgaron los Jueces, al constituirse en un elemento que no hace sino corroborar cabalmente lo manifestado no sólo por la víctima y la testigo Javiera Acevedo, sino también por su pareja y hermana del ofendido, ya que al observar y escuchar lo allí registrado, no cabe duda alguna que la gente se muestra airada y extremadamente molesta con el carabinero que aparece en las imágenes, al que reprochan e increpan con insultos por haber golpeado al joven, y no por otra motivo o circunstancia, reacción que no tendría justificación de no haber sido efectivo lo expuesto por los antes mencionados.

La fuerza probatoria de dicho material sirve para descartar y dejar sin sustento todas las demás alegaciones de la defensa en su afán de conseguir la absolución de su representado, único funcionario de carabineros presente en el lugar de los hechos, según propia declaración, y cuya explicación de lo sucedido ese 19 de octubre del 2019, fue total y absolutamente desvirtuada mediante la prueba de cargo traída al juicio, principalmente, la declaración del afectado, la de la testigo Javiera Quevedo, y el video exhibido durante el juicio, antecedentes que en un análisis racional resultaron suficientes para tener por cierto que fue el acusado Andrés Urrutia Garcés quien agredió a Retamales León, y que sus lesiones fueron consecuencia de dicha acción y no por la caída que sufrió cuando escapaba de éste, a quien por lo demás reconoció en la sala de juicio como su agresor, al igual que la testigo antes mencionada.

3.- En cuanto a las críticas del trabajo de la doctora Negretti, sólo cabe hacer presente que esta profesional fue categórica al manifestar que las lesiones de la víctima eran compatibles con la acción de un objeto contundente, por ejemplo, un golpe de pie-calzado, descartando que pudieran haber sido causadas por una caída, salvo que fuera de altura, pero en este caso, lo fue a nivel del piso, como asimismo, que ellas podían haber sido causadas por un solo golpe.

Por otra parte, de los conocimientos científicos entregados por la doctora Negretti, analizados a la luz de la lógica, no permiten sino tener por asentado, que la explicación que más se condice con la realidad de los hechos es la que entrega el ofendido y Javiera Quevedo, abonados sus relatos con el mérito de lo visto y escuchado en el video tantas veces aludido, **no obstante la incuestionable experiencia profesional de la doctora Cerda**, cuyas conclusiones se estimaron como una mera opinión personal basada en sola lectura de los antecedentes contenidos en la carpeta investigativa y aportada por el abogado del acusado, sin referir alguna otra fuente de consulta o la aplicación de otros instrumentos de la especialidad, trabajo que, además, se apreció parcial y sesgado, al quedar en evidencia que en su exposición libre entregó información que no se ajustaba a los antecedentes que ella mismo dijo haber analizado y estudiado, falencia cuyas explicaciones no resultaron suficientes, lo que sin duda contaminó la respuesta de la interrogante que la defensa le planteó al encomendarle la pericia traída al juicio.

Por lo anterior, es que la versión entregada por el acusado en estrados resultó cabalmente desvirtuada conforme al mérito de los antecedentes probatorios reseñados y analizados más arriba, no existiendo duda alguna basada en la razón de que no fue sino el acusado Urrutia Garcés, el funcionario de Carabineros que agredió al ciudadano Erwin Retamales León, el día, lugar y hora indicados en las acusaciones, **y que en dicha condición fue reconocido en estrados por el afectado, su pareja, hermana y la testigo Javiera Quevedo**, lo que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 15 N° 1 del código de castigo, justifica la decisión de condenarlo como título de autor directo de los hechos materia del juicio.

DECIMO QUINTO: Que, con lo expuesto en los motivos anteriores, **estos Jueces se han hecho cargo de las alegaciones vertidas por los intervinientes en sus discursos de clausura.**

DECIMO SEXTO: Que en la oportunidad prevista por el inciso final del artículo 343 del código del ramo, la fiscalía acompañó el extracto de filiación que no contiene anotaciones, **por lo que goza de irreprochable conducta anterior.**

A su turno, **la defensa impetró en favor de su representado la atenuante de colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, a la que se opusieron los acusadores y que este Tribunal rechazará,** por cuanto, el acusado, si bien renunció a su derecho de guardar silencio y entregó a los Jueces su versión de los hechos, su testimonio en modo alguno puede considerarse como colaboración, y mucho menos sustancial, desde el momento en que de manera enfática negó haber agredido al ofendido, añadiendo incluso que ni siquiera estuvo cerca suyo, afirmaciones que fueron absolutamente desvirtuadas y desmentidas por la prueba de cargo traída al juicio, según los fundamentos contenidos más arriba en esta sentencia, siendo insuficiente para la pretensión de la defensa, la circunstancia de posicionarse en el lugar y haber participado en el procedimiento policial originado por el suceso descrito en la acusación, información que igualmente se pudo conocer por otras fuentes independientes a su declaración.

DECIMO SEPTIMO: Que el delito de apremios ilegítimos del artículo 150 D. del código punitivo está sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo, y teniendo en consideración que favorece al acusado una circunstancia atenuante, sin que le perjudiquen agravantes, conforme lo dispone el inciso segundo del artículo 68 del mismo texto legal, se debe excluir el grado máximo de la pena, quedando entonces regulado el marco penal en el presidio menor en su grado medio, y cuya cuantía se regulará atendiendo a la extensión del mal causado por el delito, al tenor de lo expresado por el ofendido y su entorno familiar, en cuanto a que no cabe duda que lo vivido el día de los hechos necesariamente le ocasionó no sólo un detrimento físico, sino también psicológico, emocional y material que es menester tener en cuenta en esta parte, atento el mandato que impone el artículo 69 del texto legal que se viene citando.

DECIMO OCTAVO: Que se eximirá del pago de las costas al acusado por no haber sido condenado en los términos señalados en las acusaciones contenidas en el auto de apertura de juicio oral, decisión que se extiende al Ministerio Público y la querellante INDH, por estimar que hubo motivo plausible para deducir acusación en los términos expresados en sus respectivos libelos, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 47 y 48 del Código Procesal Penal.

Por estas consideraciones, y lo dispuesto en los artículos 1, 7, 11 N°6, 15 N°1, 30, 50, 68, 69, 74 y 150 D. del Código Penal, y en los artículos 45, 47, 48, 295, 297, 309, 314, 319, 323, 332, 314, 319, 340, 341, 342, 343 del Código Procesal Penal, se **declara que:**

I.- Se CONDENA a Andrés Henry Urrutia Garcés, ya individualizado, **a la pena de 940 (novecientos cuarenta) días** de presidio menor en su grado medio, y a las accesorias de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, como autor del delito de apremios ilegítimos en la persona de Erwin Bastian Retamales León, ilícito perpetrado el 19 de octubre de 2019 en la comuna de El Bosque.

La pena privativa de libertad impuesta a Urrutia Garcés se tiene por cumplida con el mayor tiempo que permaneció privado de libertad por esta causa, según consta del **certificado suscrito por el jefe de la Unidad de Administración de Causas de este tribunal**, incorporado a la carpeta digital que contiene este proceso.

II.- Se exime al acusado y a los acusadores del pago de las costas de la causa.

En su oportunidad, devuélvase a los intervinientes la documentación incorporada al juicio.

Asimismo, cúmplase cuando corresponda con lo prescrito en el artículo 17 de la Ley 18.556 sobre Registro Electoral.

Ejecutoriada esta sentencia, remítase al Juzgado de Garantía competente para los efectos de lo que dispone el artículo 468 del Código Procesal Penal.

Cúmplase con lo dispuesto en el acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema sobre anonimización de sentencias.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

RUC 1910062244-3

RIT 241-2023

Pronunciada por los Magistrados doña Marcia Fuentes Castro y don Renato Javier Pinilla Garrido.

Se deja constancia la Magistrada doña Karen Ivonne Garrido Saldías sólo asistió a las primeras tres jornadas de juicio, dado que, a partir del viernes 21 de junio en curso, comenzó a hacer uso de su feriado legal.